



La batalla judicial que viene por el 63% de Azul Azul



Michael Clark.

La corredora del BCI ganó un juicio para liquidar la matriz del grupo Sartor y ahora podrá reactivar una antigua petición en tribunales: que se revoque la venta del 90% de las cuotas de Tactical Sport a Michael Clark, que esas acciones vuelvan a manos de la empresa en quiebra y que un liquidador las venda en el mercado.

VÍCTOR COFRÉ

El mundo es difícil de describir y en él confluyen el lenguaje de los negocios y el lenguaje jurídico. La historia del opaco control de Azul Azul durante los últimos cinco años se ha escrito en registros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), pero también en los tribunales.

Primero, los negocios. En 2021, el fondo de inversión privado Tactical Sport pagó US\$ 15,5 millones a Carlos Heller por el 63,07% de las acciones de Azul Azul, asumiendo entonces el control de la concesionaria del club de fútbol de la Universidad de Chile. Los recursos para esa compra habrían provenido de dineros de terceras personas que invirtieron en Sartor, pero en otros fondos, y fueron desviados a Tactical Sport, denunció el liquidador designado por la CMF en la intervención del grupo.

Cuatro años después de la compra a Heller, cuando el grupo Sartor, controlado y dirigido por Pedro Pablo Larraín Mery, estaba siendo cercado por la CMF y los acreedores comenzaban a inquietarse, los socios del holding vendieron el 90% de las cuotas de Tactical Sport a Michael Clark, quien ya era dueño del 10% y tenía una antigua relación de negocios con Sartor, donde incluso era miembro del directorio. El vendedor -los nombres de cada sociedad aquí son claves- era Asesorías e Inversiones Sartor S.A.

Las fechas aquí también son claves. La venta a Michael Clark se hizo el 13 de diciembre de 2024, según notificó con posterioridad a la CMF. Tres días antes, el 10 de diciembre, Clark había declarado frente al fiscal Andrés Montes, de la CMF. Pero más relevante aún, un día antes de la venta, el 12 de diciembre, un acreedor de Asesorías e Inversiones Sar-

tor S.A., BCI Corredores de Bolsa, le había comunicado el término de un contrato de simultáneas y reclamaba el pago de \$ 5.708 millones. Abogados de los acreedores de Sartor han reparado en la similitud del monto pactado, un día después, en la venta a Clark: US\$ 5.719.488.

Pero hay otra más: BCI insinúa que ese dinero no está, que el precio no fue pagado en efectivo por Clark y que fue registrado como una cuenta por pagar por parte de Inversiones Antumalal, su sociedad, y una cuenta por cobrar en los balances de Asesorías e Inversiones Sartor, el vendedor.

La discusión está en el frente penal y en el frente civil. En el primero, abierto por una querrela de Credicorp a la que se han sumado numerosos acreedores de Sartor, juega un rol protagónico la gestora Toesca, que administra hoy la AGF y los fondos de Sartor intervenidos por la CMF. Su abogado, Sergio Rodríguez Oro, se querrelló esta semana contra ocho personas ligadas a Sartor, entre ellas Larraín y Clark, por negociación incompatible y administración desleal en la arista de la venta de Azul Azul.

En el frente civil, BCI es defendida por el jurista José Miguel Ried. BCI pidió en enero de 2025, en el 13 Juzgado Civil de Santiago, la liquidación forzosa de Sartor, además de otra medida que, si es concedida, podría modificar por completo el accionariado de Azul Azul. Y terminar con la etapa de Sartor y Michael Clark en el club deportivo.

Acción revocatoria

En el juicio civil de liquidación, un fallo de 86 páginas inclinó la semana pasada la balanza en favor del BCI. La jueza María Eugenia Silva rechazó las excepciones presentadas y anunció que "dictará resolución de liquidación" de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. "en su

oportunidad". Las partes esperan inquietas esa resolución, porque una vez dictada, la matriz del grupo estará oficialmente en liquidación, el nombre que adoptaron en la actual legislación las antiguas quiebras.

Con esa resolución, además, la jueza del 13 Juzgado Civil de Santiago deberá designar un liquidador. En el proceso, Sartor se ha defendido con diversos incidentes e incluso recurrió al Tribunal Constitucional, que detuvo el juicio durante varios meses. Ahí es defendida por el abogado Luis Felipe Castañeda.

Una vez ejecutada la liquidación, vendrá una discusión aún más relevante: BCI pidió en el juicio al tribunal el otorgamiento de una acción revocatoria concursal. ¿Qué pide? Que la venta de diciembre de 2024 a Michael Clark se declare nula y se retrotraiga. Ese tipo de medidas permiten proteger a los acreedores y dejar sin efecto actos realizados por un deudor antes de su insolvencia. La lógica es que la venta de Azul Azul a Michael Clark, en un momento en el que Sartor era apremiada por sus acreedores, disminuyó artificialmente su patrimonio e impidió el cobro de sus acreencias, con ese activo. Clark, de hecho, pagó un tercio de lo que había desembolsado Sartor a Carlos Heller en 2021. Por el mismo 63,07%.

Si la jueza concede aquella medida -un abogado afirma que esa discusión puede tardar meses o incluso años; otro jurista lo contradice y sostiene que será de rápida resolución, pero de semanas, no de días-, la venta de 2024 a Michael Clark se anulará y las cuotas de Tactical Sport volverán a Asesorías e Inversiones Sartor, ahora en liquidación. El liquidador podrá designar un nuevo administrador de Tactical Sport -hoy es otra sociedad ligada al grupo Sartor- y así podría hasta intervenir el gobierno corporativo de Azul

Azul. Un abogado cree que aquello permitirá a los acreedores, BCI Corredores, el principal, resarcirse de parte de lo perdido. ¿Por qué vía? Vendiendo el activo recuperado. Pero como las cuotas de Tactical Sport son ilíquidas, lo que se podría vender es el activo subyacente: el 63,05% de Azul Azul. Alguno apuesta por una licitación o una oferta directa. Es la pelea que vendrá en el caso de Azul Azul y que no se jugará en un estadio, sino en tribunales.

El romántico viajero

Otro partido es el que juega Toesca contra Sartor en el Ministerio Público y el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde se presentó su tercera querrela, ahora por Azul Azul. El abogado de Toesca involucró a otras personas en la investigación penal.

Uno de ellos es el vicepresidente de Azul Azul, Juan Ramón Correa Díaz, quien a través de su sociedad Romántico Viajero SpA., compró en enero a la familia Schapira el 21,44% de Azul Azul en \$ 6.716 millones. En un negocio difícil de entender, Correa pagó por el 21,44% más de lo que presuntamente pagó Clark por el 63,07% hace poco más de un año. La Fiscalía allanó hace dos semanas la casa de Michael Clark, pero también las oficinas de Correa, quien esta semana presentó un recurso de amparo.

La querrela de Toesca pide que Correa, abogado, sea citado a declarar para que explique cómo financió Azul Azul. La querrela dice: "No existen antecedentes del origen y la trazabilidad de los fondos empleados por Romántico Viajero SpA en la referida adquisición. Será materia de la investigación determinar si estos provenían de los aportantes de los fondos Sartor o bien de alguna actividad irregular de los representantes o ejecutivos del grupo Sartor".